

La democratización de las ciencias políticas

Peter deLeon

Durante los últimos años, numerosos autores se han referido a las limitaciones del análisis de las políticas públicas. Algunas de estas críticas se han dirigido a los aspectos temáticos de esta actividad, y señalan que los largos años y las enormes cantidades de dinero invertidos en la investigación política no han mejorado las políticas estadounidenses sobre bienestar social ni han corregido las deficiencias del sistema educativo del país. Aunque es legítimo argüir que los problemas abordados son extremadamente difíciles —de hecho, tal vez no tengan una solución factible—, es muy poco el consuelo que esto aporta ante el deslinde de responsabilidades. Otros han descrito lo que califican como contradicciones internas entre la filosofía y los enfoques de las ciencias políticas.¹ Y todos se quejan de que nadie parece escuchar nunca, aparentemente por buenas razones. El orden general del día parece ser el de achacar culpas en lugar de proponer soluciones reales.

Peter deLeon es profesor de políticas públicas en la Universidad de Colorado (Denver).

Este texto fue elaborado para presentarse ante la Reunión Anual de la Asociación Estadunidense de Ciencias Políticas en San Francisco, California, del 30 de agosto al 2 de septiembre de 1990. Tengo una gran deuda intelectual con Frank Fischer (Rutgers), Hank Jenkins-Smith (Nuevo México), Robert Denhardt (University of Central Florida), y con Linda deLeon (University of Colorado-Denver), así como con los asesores anónimos que comentaron constructivamente el texto.

Esta es una traducción del artículo "The Democratization of the Policy Sciences", publicado en *Public Administration Review*. Se traduce con permiso del autor. Traducción de Susana Marín de Rawlinson.

¹ Dos de los críticos más claros en torno a este tema son Hawkesworth (1988) y Stone (1988).

Existe un aspecto de la investigación política, especialmente de parte de agencias del gobierno o patrocinadas por el mismo, que muchos han identificado como la fuente máxima de estos problemas: su carácter elitista. ¿Cómo puede saber el aislado analista de Washington lo que desea el beneficiario de (digamos) Santa Fe, en especial si el analista y el beneficiario viven y representan culturas y experiencias extremadamente distintas? Si nos atenemos a esta afirmación, no nos sorprende que el analista constantemente recomiende cosas que el beneficiario considera extrañamente inadecuadas o inapropiadas; en consecuencia, el programa se tambalea y a menudo fenece. No sólo no se ha corregido el problema, sino que, lo que es peor, el supuesto benefactor ahora tiene una opinión distinta y probablemente menos positiva del gobierno. "Así, un efecto secundario involuntario del análisis político puede ser la erección de barreras que obstaculizan importantes objetivos de democracia participativa" (Jenkins-Smith, 1988, p. 69).

Este síndrome de escisión contribuye casi con seguridad a la ineficacia de los programas y de sus resultados. Por esa única razón es tan turbulenta esta relación de dicotomía. No obstante, existe un segundo aspecto en el problema bicultural que inquieta aún más a los grupos políticos democráticos. A saber: la fuerte tendencia que existe, ante esta situación, a reconocer a los políticos como los clientes legítimos —y a menudo exclusivos— de los analistas, lo que viene a reforzar el aislamiento de estos últimos. De hecho, en sus posiciones actuales (geográficas y burocráticas), los analistas están divorciados de las exigencias, necesidades y (lo más crítico) valores de las personas a quienes supuestamente auxilian. De tal manera que están ayudando a establecer y mantener la separación entre el gobernante y los gobernados. Dentro de este ambiente, aparentan ser indiferentes a la forma de gobierno. Como señala Dryzek (1989, p. 98), "de hecho, hasta la fecha la mayoría de los esfuerzos de los analistas políticos son congruentes con las ciencias políticas, aunque sutiles, de la tiranía". Los conocimientos políticos en todo tipo de áreas se encuentran exclusivamente en manos de los expertos, donde superan y, por ende, debilitan el carácter democrático.²

Esta tendencia contrasta fuertemente con la concepción original de las ciencias políticas. Inicialmente se diseñaron para aportar "conocimientos pertinentes a la integración de los valores creados e in-

² La mejor explicación de esta crítica se encuentra en Jenkins-Smith (1989).

corporados en las relaciones interpersonales [como] la dignidad humana y el aprovechamiento de las capacidades humanas" (Lasswell y Kaplan, 1950, p. xii). Como lo formuló originalmente Harold Lasswell (1951, p. 15), eran las "ciencias políticas de la democracia [...] dirigidas al conocimiento necesario para mejorar la práctica de la democracia".

Las raíces de esta discrepancia no son difíciles de encontrar. A pesar del trabajo pionero de humanistas como Lasswell, Abraham Kaplan y Robert Merton, la mayor parte de la investigación realizada inicialmente sobre las políticas fue hecha por técnicos, principalmente analistas de sistemas e investigadores de operaciones. Su búsqueda positivista de una función con objetivos claramente definidos requería pocas contribuciones del beneficiario. Posteriormente esta tendencia se vio reforzada por economistas que hacían sus recomendaciones políticas sobre relaciones económicas "objetivas" establecidas por actores racionales, que tampoco requerían grandes conocimientos sobre las necesidades particulares de los supuestos clientes y el clima político dentro del cual, por definición, deben operar los políticos. Prevalcían sus presuposiciones (algunos dirían sus presunciones).³ En los textos más difundidos de economía se adjudicaban cualidades talismánicas a la economía aplicada, generalmente disfrazada de análisis de costos y beneficios; por ejemplo: "El análisis de costos y beneficios es una metodología a través de la cual buscamos la eficiencia y que tiene como efecto limitar las vaguedades del proceso político" (Stokey y Zeckhauser, 1978, p. 151). Los modelos econométricos tuvieron gran aceptación en campos tan dispares como la limitación de costos de energía y los hospitales, sin nunca tener la necesidad de preguntar su opinión a los consumidores.

No obstante, existe una amplia literatura que ha empleado con seriedad los paradigmas económicos (incluyendo la teoría de la elección pública). Sin repetir aquí estos argumentos,⁴ el principal problema del modelo económico era que no podía mantener su rigor teórico e incorporar al mismo tiempo en su análisis valores personales y políticos. Existía la constante incapacidad de reconciliar la eficacia racional con la aceptabilidad política. Incluso el análisis de costos y beneficios resultó ser subjetivo y manipulable excepto en los ejercicios más mundanos (Downs y Larkey, 1986); las cuestiones críticas de postura mos-

³ Esta evolución se describe en deLeon (1989).

⁴ Las críticas más accesibles se encuentran en Bobrow y Dryzek (1987), y Paris y Reynolds (1983).

traron una inspiración más política que analítica (Whittington y Macrae, 1986; Trumbell, 1990). En síntesis, no era capaz de operar en ningún ámbito político donde surgieran variables que no fueran estrictamente cuestiones económicas (es decir, en casi ningún área de interés) sin contribuir más al síndrome del elitismo y al creciente distanciamiento entre el analista y el público. A su vez, esto condujo a una falta de confianza entre ambos grupos.

Una alternativa que se propuso para las limitaciones que se percibían en el paradigma del actor racional fue que los valores de los ciudadanos se incorporaran en mayor medida y explícitamente en el proceso político (por ejemplo, Fischer y Forester, 1987; Fischer, 1980). Ciertamente se trata de una respuesta apropiada, pero que presenta obstáculos formidables para su aplicación, como veremos más adelante. Sin embargo, en este caso el resultado podría justificar los esfuerzos, pues haría que la investigación política estuviera más consciente de los valores relevantes y reduciría la distancia entre el analista y el beneficiario.

La democratización del análisis político

Muchos autores han escrito sobre los dilemas de la democracia liberal, a medida que los grupos con intereses políticos intervienen entre los políticos y los ciudadanos.⁵ El remedio que se ha recomendado cada vez más es una mayor participación ciudadana directa en los actos gubernamentales, lo cual refleja lo que Redford (1969) llama una "moralidad democrática". Aunque la forma y el foro pueden variar,⁶ la idea básicamente es la misma. Este tipo de "democracia fuerte" (en contraste con la "democracia tenue") ha sido definida por Barber (1984, p. 132) como:

la política participativa en que se resuelven los conflictos sin un terreno independiente, a través del proceso participativo de autolegislación constante y cercana y la creación de una comunidad política capaz de transformar a individuos dependientes y privados en ciudadanos libres, y a los intereses parciales y privados en bienes públicos.

⁵ Uno de los más persuasivos sigue siendo Dahl (1982); véase también Bachrach (1976).

⁶ Véase Jenkins-Smith (1988).

Dryzek (1989, p. 118) secunda la definición propuesta por Barber y señala que

la educación política, la acción participativa y la solución real de los problemas sociales podrían conjuntamente ayudar a constituir una comunidad totalmente capaz de dirigir su propio rumbo hacia el futuro. La distinción entre el ciudadano y el experto perdería fuerza (véanse también Pateman, 1970; Benello y Roussopoulos (comps.), 1971; Langton (comp.), 1978).

Este enfoque se ha traducido al lenguaje de la investigación política. Según Paris y Reynolds (1983, p. 260), "toda la variedad de ideologías racionales apoya el uso de los procesos republicanos o demócratas de toma de decisiones aproximada y ampliamente". Lindblom (1986, p. 361) plantea el razonamiento con admirable concisión: "En lugar de servir solamente a las necesidades de los funcionarios, ayuda al ciudadano ordinario".

Sin cuestionar estas afirmaciones de una "unión más perfecta", me gustaría argumentar que es mucho más difícil poner en práctica la democracia participativa —o una variedad que algunos llaman "entrega de poder"— que proponerla, quizás incluso resulte imposible. Aun si aceptamos su rectitud ideológica, debemos hacer una pausa ante sus formidables obstáculos operativos. ¿Cómo se asegura que la ciudadanía esté informada? Aunque ésta siempre ha sido una propuesta dudosa, parece estar perdiendo terreno incluso al mismo tiempo que Barber y sus colegas basan en ella sus soluciones. Una reciente encuesta para *Los Angeles Times* (Anónimo, 1990, p. iii) comenta esta pérdida de interés:

Desde 1941 hasta 1975, los jóvenes estadounidenses sabían tanto sobre los asuntos y personajes públicos como sus mayores, y seguían con el mismo interés los principales sucesos. Pero a partir de 1975, los jóvenes prestan mucha menos atención a las noticias y a los asuntos públicos. Hoy en día, típicamente muestran 20% menos de interés por los acontecimientos importantes que los mayores de 30 años.

¿O que la ciudadanía participe? Persistentemente, entre las democracias occidentales, los estadounidenses han mostrado una de las más bajas tasas de votación. Ante esta falta —por no hablar de las soluciones a diversos problemas técnicos, como la forma de consultar a toda la población—, la democracia participativa empieza a perder bri-

llo. Y, por último, ¿es viable?, ¿funcionaría? Las decisiones, por su misma naturaleza, se requieren cuando hay disputas; es indispensable tomarlas, y a menudo con rapidez. Pero Barber (1984, p. 207) afirma que “siempre que le sea posible, un demócrata fuerte tratará de retrasar aquellas decisiones en que no existe un acuerdo en lugar de obtener una decisión mayoritaria que deje tras de sí un legado de insatisfacción”. Barber parece preferir una democracia esclerótica en lugar de la variedad tenue. En resumen, los estudiosos que se basan en la democracia participativa para resucitar la credibilidad de las ciencias políticas ciertamente deben ser pacientes.

Pero la democracia participativa no es lo mismo que el análisis político participativo o democrático. El análisis político democrático debe dar como resultado una política mucho más eficiente, pues operaría con base en las jerarquías de valores y necesidades de los beneficiarios (es decir, de quienes se verán directamente afectados por los programas), a diferencia de las de los lejanos analistas y políticos (a pesar de su buena disposición). Más que dirigir nuestros esfuerzos hacia los objetivos más ambiciosos (tal vez imposibles) de la democracia participativa, la realización de una ciencia política de la democracia es un objetivo más discreto, con importantes ventajas para todos los afectados. El logro de un análisis político participativo no sólo beneficiaría a las ciencias políticas de la democracia como tales, sino que además mejoraría directamente las posibilidades y la credibilidad de la democracia participativa.

Análisis político y consulta política

El concepto de un análisis político participativo es relativamente claro. En vez de implicar a todos los ciudadanos en la toma de decisiones (la “entrega de poder”, por ejemplo, en las Ciudades Modelo), la idea es aumentar la participación ciudadana en la articulación y formulación de los programas de política pública. En lugar de hacer que muchos participen en las decisiones políticas reales (como ocurre en una democracia fuerte), requiere que los analistas políticos diseñen y practiquen activamente la forma de recolectar e incluir los puntos de vista personales de los ciudadanos en el proceso de formulación de políticas. Esto representa un esfuerzo consciente por traducir y agregar fielmente las preferencias individuales en las políticas públicas. Según March y Olsen (1990), la suposición subyacente es que las personas confiarán

más en una política si se les consultó durante su proceso de desarrollo, aun si la política final no coincide con sus preferencias particulares. Incluso Barber (1984, p. 207) parecería estar de acuerdo: “Pero aceptar un juicio político para cuya formulación hemos cooperado nos es menos extraño que tener que aceptar una mayoría que nos ha derrotado en una votación”.

En esta acepción, el concepto de “políticas compartidas” puede equipararse aproximadamente con un acceso a la planeación y a las decisiones políticas, y con una influencia implícita en las decisiones operativas subsecuentes. No es necesario que las personas estén particularmente bien informadas. El requisito básico no es que estos ciudadanos sean lo suficientemente conocedores (“expertos”) para comentar, sino que los afecte lo suficiente para que estén dispuestos a expresar sus percepciones en un foro político público abierto. Esta postura sostiene que existen alternativas políticas críticas en las que se debe elegir con base en información que va más allá de las cifras y los datos expertos. Un ciudadano no tendría que comprender los megatones y el fratricidio para saber que el mundo se encuentra ante un peligro nuclear y que sería más seguro si no hubiera tantas de estas armas (Shubik y Bracken, 1982), una idea que durante las últimas dos décadas ha llevado a una mayor participación en el debate político estratégico anteriormente cerrado (deLeon, 1987; Dahl, 1985).

Además, el concepto de políticas compartidas implica que estos ciudadanos tienen cierta confianza en que su opinión individual y colectiva sobre un tema específico (a diferencia de un voto sobre una amalgama ambigua de temas en una elección general) será escuchado y considerado en los círculos políticos. Ésta es la principal distinción entre la democracia participativa y un análisis político democrático.⁷

Esto representa una carga nueva y no muy bien recibida (hasta la fecha) para las instituciones y analistas gubernamentales. Ahora deben buscar e incluso solicitar la opinión del público respecto a los asuntos políticos analizados; tendrían que renunciar al lujo que implica la comodidad del aislamiento y el anonimato. Las encuestas de opinión pública sólo deben constituir una entre múltiples técnicas. Particularmente, se deben crear y ubicar nuevos foros ciudadanos de manera que las partes afectadas puedan dar a conocer sus ideas con un mínimo de inconvenientes. Una posibilidad son los “paneles ciudadanos” que com-

⁷ En alguna otra obra me he referido a este concepto como “análisis político participativo” (deLeon, 1990).

binan técnicas de encuesta y ciudadanos seleccionados al azar (Crosby, Kelley y Schaefer, 1986). En estos foros es necesario proporcionar información de la manera más equilibrada posible. Entonces el analista debe sumar de alguna manera estos materiales a sus análisis y recomendaciones. Fischer (1980, pp. 49-50) resume los nuevos requisitos: "Dicha argumentación política parte del reconocimiento de que los participantes no tienen respuestas sólidas a las cuestiones que se están discutiendo, ni siquiera un método firme para obtener la respuesta". La novedad misma de estas exigencias complicaría su aceptación dentro del ámbito de las rutinas gubernamentales cuya práctica es tan difundida.

Éstos no son conceptos novedosos. Los comités congresistas a menudo llevan a cabo audiencias en diferentes partes del país. Con frecuencia las audiencias sobre el impacto ambiental son así y son comunes (Bartlett (comp.), 1988; Hart *et al.* (comps.), 1984). Este proceso se practica ampliamente en niveles locales de gobierno, con resultados muy diversos (Gittell, 1980; Kweit y Kweit, 1981). Su extensión a otras áreas debe ser directa. Sin embargo, a pesar de su aparente valor, el concepto de políticas compartidas oculta cualquier cantidad de trampas potencialmente letales. ¿Qué motivos impulsarían a un gobierno a probar estos procedimientos nuevos y problemáticos, o a participar a los ciudadanos? ¿Quién decide cuáles de las partes tienen una voz relevante y cómo se evita la contaminación de la tendenciosidad política? ¿O quién hablará a nombre de estos grupos? ¿Qué criterios se emplearán? ¿Cuáles son las reglas operativas para proceder? Majone escribe que "el logro analítico supremo ya no es el cómputo de estrategias óptimas, sino el diseño de reglas y evidencias sociales para proceder". Pero son mínimas sus sugerencias respecto a las reglas en sí, excepto que deben ser "argumentativas" y adjudicadas en "contextos opuestos", sin tomar en cuenta de alguna forma que el sistema judicial (su analogía preferida) se ha vuelto sumamente complejo (Majone, 1977, p. 174). ¿De qué manera se puede integrar todo este montón de datos recién adquiridos al proceso político? ¿Sospecharán los perdedores que se trata de una farsa política y se negarán a participar en ocasiones subsecuentes? Y así sucesivamente.

De la misma forma, el análisis de los posibles ejemplos o modelos que tenemos a la mano a nivel nacional no es muy alentador. Las Declaraciones sobre el Impacto Ambiental (DIA) de la NEPA, aunque se han difundido ampliamente, no han apoyado en gran medida la eficacia de la propuesta, pero sí han ampliado en grado uniforme y grave el

tiempo necesario para tomar decisiones, situación que ciertamente no es positiva cuando algo es urgente. Para las vastamente publicitadas audiencias sobre energía solar, el grupo de revisión de políticas domésticas (RPD) del presidente Carter trabajó concienzudamente para reunir cientos de opiniones a través de una gran cantidad de reuniones que produjeron kilos de testimonios públicos. Pero, a fin de cuentas, estas audiencias fueron desechadas en gran medida por el personal de la RPD, que

consideraba el núcleo del problema [sobre la energía solar] en términos muy técnicos, y el público lego no tenía nada que decir que pudiera ayudarles a resolver ese problema [...] Por carecer de ciertos conocimientos más bien esotéricos, un grupo de ciudadanos interesados se vio privado de participar en un debate político por el cual mostraban un interés intenso (Laird, 1988).

Parecería entonces que un análisis político democrático es mejor en teoría que en la práctica. Como tal, tristemente, debe descartarse por prudencia. Pero tal vez esta conclusión sea apresurada, basada en las condiciones actuales y no en algo que podría ser posible. Los procedimientos de las DIA han requerido gran cantidad de tiempo, pero existe una porción significativa de la población que ha considerado satisfactorios los resultados; algunos (en general los conservacionistas) incluso encuentran loables sus procesos dilatorios. Es decir, para aquellos casos en que las limitaciones de tiempo pueden ser flexibles, las políticas resultantes parecen valer la pena el lapso de gestación. Los ciudadanos pueden ser más receptivos a estos retrasos si se les asegura que ellos (y no un gobierno distante) son un componente del retraso.

Los requisitos temporales más tardados son una característica incuestionable de las DIA y, como hemos dicho, hay ocasiones en que el tiempo es crucial. Aun así, no se trata de un golpe mortal contra esta idea. Lo que sí verifica es algo que ya sabíamos: no todas las decisiones se deben abordar de manera idéntica y el tiempo es una de las variables importantes para determinar qué forma debe adoptar la toma de una decisión. Las críticas a las DIA pueden considerarse entonces como un ejemplo del "vaso medio vacío" cuando, para la mayoría, el vaso está medio lleno: ciertamente una perspectiva más alentadora hacia la democratización del análisis de políticas públicas. Propongo que seleccionemos algunos asuntos políticos cuyo alcance, importancia y programación se prestarían a un estilo más democrático de análisis

político. Temas relacionados con la salud, el bienestar social, la vivienda, la seguridad nacional y la infraestructura se beneficiarían de un examen más público que el existente en la actualidad. La descentralización de las autoridades escolares que se está dando en todo el país (Estados Unidos) es un ejemplo de políticas compartidas a nivel local, una experiencia que podría convertirse en un "experimento natural" para las políticas compartidas a escala nacional.

Para que esto ocurra, es necesario que haya una experiencia de aprendizaje en dos sentidos. El primero es que los analistas gubernamentales, agencias y políticos deben crear y hacer proliferar los incentivos y los foros esenciales para que funcione el análisis político democrático. Por otra parte, es preciso que proporcionen cierta seguridad de que no serán farsas, es decir, que la información obtenida será un elemento importante en la formulación de las políticas y que la información no se manipulará ni se restringirá (Jenkins-Smith, 1988, p. 78). El segundo es que los ciudadanos deben reconocer que es responsabilidad suya dar a conocer sus opiniones.

Como analistas debemos admitir que una vuelta parcial de la formulación de políticas hacia los beneficiarios no implica que los analistas políticos se vayan a quedar sin trabajo. Las exigencias burocráticas serían igualmente grandes, sólo que (como señalamos antes) los requisitos se verían ampliados en gran medida y tal vez serían más difíciles dada la capacitación del cuerpo de analistas actual; la sociología se uniría a la economía y a la administración pública en el arsenal disciplinario preferido de los analistas, y sería necesaria una actitud más proactiva para promover el proceso en lugar de una posición particular (Kathlene y Martin, 1991).

Conclusiones

Como se señaló antes, el diseño y la ejecución de un análisis político democratizado no será una transición fácil. Pero dada la percepción que tiene el público de los servidores y de los servicios gubernamentales, en yuxtaposición con el estado general de desatención hacia los análisis de las políticas públicas, es claro que deben tomarse medidas radicales para que los gobernados conserven algo de su fe en quien los gobierna, es decir, para que continúen la filosofía y la práctica de gobierno a las cuales nos suscribimos. Por lo menos, la idea de las políticas compartidas reafirmaría la dedicación de esta profesión a las ciencias

políticas de la democracia, una democracia "del pueblo, por el pueblo y para el pueblo": un simbolismo fundamental.

Referencias bibliográficas

- Anónimo (1990), "The Age of Indifference. A Study of Young Americans and how they View the News", *Los Angeles Times*, Mirror Center for the People and the Press, 28 de junio.
- Bachrach, Peter (1976), *The Theory of Democratic Elitism*, Boston, Little Brown.
- Barber, Benjamin R. (1984), *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, Berkeley, University of California Press.
- Bartlett, Robert (comp.) (1988), Symposium on "Policy and Impact Statements", *Policy Studies Review*, vol. 18, otoño, *passim*.
- Benello, C. George y Dimitrios Roussopoulos (comps.) (1971), *The Case for Participatory Democracy*, Nueva York, Grossman.
- Bobrow, Davis B. y John S. Dryzek (1987), *Policy Analysis by Design*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
- Crosby, Ned, Janet Kelley y Paul Schaefer (1986), "Citizen Panels: A New Approach to Citizen Participation", *Public Administration Review*, vol. 46, marzo-abril, pp. 170-179.
- Dahl, Robert A. (1982), *Dilemmas of a Pluralist Democracy*, New Haven, Yale University Press.
- (1985), *Controlling Nuclear Weapons: Democracy versus Guardianship*, Syracuse, Syracuse University Press.
- deLeon, Peter (1987), *The Altered Strategic Environment*, Lexington, D.C. Heath.
- (1989), *Advice and Consent: The Development of the Policy Sciences*, Nueva York, The Russell Sage Foundation.
- (1990), "Participatory Policies: Prescriptions and Precautions", *Asian Journal of Public Administration*, vol. 12, junio, pp. 29-54.
- Downs, George y Patrick D. Larkey (1986), *The Search for Governmental Efficiency*, Nueva York, Random House.
- Dryzek, John S. (1989), "Policy Sciences of Democracy", *Polity*, vol. 22, otoño, pp. 97-118.
- Fischer, Frank (1980), *Politics, Values, and Public Choice*, Boulder, Westview Press.
- Fischer, Frank y John Forester (comps.) (1987), *Confronting Values in Policy Analysis*, Newberry Park, Cal., Sage.
- Gittell, Marilyn (1980), *Limits to Citizen Participation*, Beverly Hills, Sage.

- Hart, Stuart L. et al. (comps.) (1984), *Improving Impact Assessment*, Boulder, Westview Press.
- Hawkesworth, M.E. (1988), *Theoretical Issues in Policy Analysis*, Albany, State University of New York Press.
- Jenkins-Smith, Hank C. (1988), "Analytic Debates and Policy Learning Analysis and Changes in the Federal Bureaucracy", *Policy Sciences*, vol. 21, pp. 169-212.
- (1989), *Democratic Politics and Policy Analysis*, Pacific Grove, Cal., Brooks/Cole.
- Kathlene, Lynn y John A. Martin (1991), "Enhancing Participation: Panel Designs, Perspectives, and Policy Formation", *Journal of Policy Analysis & Management*, vol. 10, invierno, pp. 46-63.
- Kweit, Mary Grisez y Robert W. Kweit (1981), *Implementing Citizen Participation in a Bureaucratic Society*, Nueva York, Praeger.
- Laird, Frank N. (1988), "Technocracy Revisited: Knowledge and Power in Technical Decisions", paper presented at the 1988 Meetings of the American Political Science Association, Washington.
- Langton, Stuart (comp.) (1978), *Citizen Participation in American*, Lexington, Lexington Books.
- Lasswell, Harold D. (1951), "The Policy Orientation", en Daniel Lerner y Harold D. Lasswell (comps.), *The Policy Sciences*, Stanford, Stanford University Press, pp. 3-16.
- Lasswell, Harold D. y Abraham Kaplan (1950), *Power and Society*, New Haven, Yale University Press.
- Lindblom, Charles E. (1986), "Who Needs What Social Research for Policy-making?", *Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization*, vol. 7, junio, pp. 345-366.
- Majone, Giandomenico (1977), "Technology Assessment and Policy Analysis", *Policy Sciences*, vol. 8, junio, pp. 173-176.
- March, James y James Reynolds (1990), *Rediscovering Institutions*, Nueva York, Free Press.
- Paris, David y James Reynolds (1983), *The Logic of Policy Inquiry*, Nueva York, Langman.
- Pateman, Carole (1970), *Participation and Democratic Theory*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Redford, Emmett S. (1969), *Democracy in the Administration State*, Nueva York, Cambridge University Press.
- Shubik, Martin y Paul Bracken (1982), "Strategic War: What Are the Questions and Who Should Be Asking Them?", *Technology in Society*, vol. 4, pp. 159-179.
- Stokey, Edith y Richard Zeckhauser (1978), *A Primer for Policy Analysis*, Nueva York, W.W. Norton.

- Stone, Deborah A. (1988), *Policy Paradox and Political Reason*, Glenville, Scott, Foresman.
- Trumbell, William M. (1990), "Who Has Standing in Cost Benefit Analysis?", *Journal of Policy Analysis & Management*, vol. 9, primavera, pp. 201-218.
- Whittington, Dale y Duncan Macrae Jr. (1986), "The Issue of Standing in Benefit Cost Analysis", *Journal of Policy & Management*, vol. 5, verano, pp. 665-682.